

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL
Medellín, veintisiete (27) de enero de dos mil veintiuno (2021)

DEMANDANTE	: OLGA HELENA VELASQUEZ SALDARRIAGA
DEMANDADO :	: COLPENSIONES, Y PROTECCION S.A
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-009-2019-00534-01
RADICADO INTERNO	: 133-20
DECISIÓN	: DICIONA Y CONFIRMA SENTENCIA
ACTA NÚMERO	: 004

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a emitir sentencia de segunda instancia en la que se estudia el recurso de apelación, en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con el **Decreto 806 de 2020**: “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, artículo 15, la sentencia se profiere escrita.

ANTECEDENTES

La parte demandante, solicita como pretensión principal se DECLARE la nulidad o ineficacia del traslado del RPM al RAIS y como subsidiaria de DECLARE la inexistencia de la afiliación, y que como consecuencia se declare que las cosas deben volver al estado en el que se encontraban entendiéndose que siempre ha permanecido en el RPM, y se ORDENE a PROTECCION S.A, a realizar la devolución a Colpensiones de todas las sumas de dinero, bonos, cotizaciones, sumas adicionales por concepto de aportes obligaciones y rendimientos devengados durante todo el tiempo que en dichas sumas estuvieron en poder de dicha administradora. Solicita se ORDNE a COLPENSIONES reactivar la afiliación y a recibir el traslado de los dineros devueltos por Protección S.A, actualizar y corregir la historia laboral, y se CONDENE a PROTECCION S.A, el reconocimiento y pago de los perjuicios morales causados estimados en 200 salarios mínimos legales mensuales.

Como fundamento factico de las pretensiones indicó que, nació el 24 de noviembre de 1962, ha laborado en diferentes entidades del sector público y privado, y estuvo afiliada al RPM, al ISS desde el 09 de marzo de 1983, y que el 22 de enero de 1996 se trasladó a PROTECCION S.A sin recibir información técnica y adecuada suscribiendo el formulario de afiliación, y no se le advirtieron las consecuencias de dicho traslado. Que antes de cumplir los 47 años, el 17 de febrero de 2009, y que según información suministrada por Protección la pensión en el RAIS sería de \$2.425.275 y en el RPM sería de \$10.251.211, recibió reasesoría y que realizó solicitudes para el traslado a Colpensiones y las mismas fueron negadas.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

En sentencia del 24 de septiembre de 2020, el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, DECLARO la INEFICACIA del acto de traslado que realizó la señora OLGA HELENA VELASQUEZ SALDARRIAGA, el 22 de enero de 1996, del RPM al RAIS a través de PROTECCIÓN S.A., DECLARO la no solución de continuidad de la vinculación de la demandante al Régimen de Prima Media con prestación definida, hoy administrada por COLPENSIONES. ORDENO a PROTECCIÓN S.A., para que proceda a trasladar todos los aportes que realizó la demandante desde 01 de marzo de 1996, al RPM hoy administrada por COLPENSIONES, y que deberá trasladar dichos aportes de forma total, esto es, incluyendo los aportes obligatorios, rendimientos financieros, gastos de administración, seguros previsionales y aportes para el fondo de garantía de pensión mínima, hasta la fecha que se haga el respectivo traslado, en un término máximo de 2 meses a partir de la ejecutoria de la sentencia. CONDENO a COLPENSIONES a recepcionar dichos aportes y tenerlos en cuenta en el historial laboral de la demandante para los efectos prestacionales que le puedan asistir a futuro. CONDENO en costas a cargo de la AFP PROTECCIÓN S.A., fijando como agencias en derecho el equivalente a tres (3) SMMLV. Exoneró de costas a COLPENSIONES.

IMPUGNACIÓN

La apoderada de la parte demandante interpone recurso de apelación en cuanto a la absolución de condena en costas a Colpensiones, indicando que dicha entidad también fue vencida en el proceso, y que dicha entidad se opuso a las pretensiones poniendo en movimiento el aparato judicial debe ser condenado en costas conforme lo dispone el artículo 365 del C.G.P.

El apoderado de Protección S.A interpone recurso de apelación parcial en cuanto a la orden de trasladar los gastos de administración y seguro previsional manifestando que este es un descuento legal autorizado en el artículo 20 de la ley 100 de 1993, y que opera para ambos regímenes, y que durante el tiempo de la afiliación la demandada administró el dinero con diligencia y cuidado y que esto se ve reflejado en los rendimientos. Que la declararse la ineficacia solo es procedente la devolución de los aportes más los rendimientos, pero no lo que se descontó por administración por administración y seguros por cuanto se trata de conceptos ya causados y corresponde a unas prestaciones ya acaecidas, y que dicha postura tiene sustento en la sentencia con radicado 31989 de septiembre de 2008.

Que además debe tenerse presente que frente al 3% para gastos de administración opera el fenómeno de la prescripción y que el artículo 113 de la ley 100 de 1993, no dispuso la devolución de dichas sumas cuando hay traslado de régimen. Por lo anterior solicita la revocatoria de la sentencia en estos puntos.

La apoderada de Colpensiones presenta recurso de apelación manifestando que en la sentencia se indica que no tiene competencia el despacho para impartir el cálculo actuarial solicitado en los alegatos de conclusión y que además se indicó que esto ha debido probarse en el proceso, sin embargo precisa que esto ha sido una consecuencia de no traer un proceso con la misma firma que ha venido defendiendo la entidad en los diferentes procesos, pero que no se puede desconocer que ha sido amplio el desarrollo que ha tenido con los años estos procesos de ineficacia y que se han manejado varias posiciones al respecto, y que los alcances de este tema se van ampliando porque no todo se ha dicho sobre el mismo y todos los días van surgiendo cosas. Que además se evidencia que los fondos de pensiones no están devolviendo de forma completa los rendimientos de las cuentas de los afiliados, que no hay control sobre esto, y que por dicha razón es la petición que realiza del estudio actuarial, pues indica que

el mismo no es con algo inexistente como lo dice el juez, sino que es al momento en que este en firme la sentencia para asegurar los recursos para el fondo, por lo que solicita no acceder a la petición de condenar a Colpensiones porque se vinculó al proceso, y acceder a realizar un estudio actuarial, que no es un cálculo actuarial, con base en los mismos parámetros utilizados por el régimen de prima media frente al estudio de las pensiones o de las diferentes prestaciones económicas sea pensión de invalidez, vejez o muerte.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El apoderado de la parte demandante solicita se confirme la decisión, al haberse sustentado en los parámetros establecidos por la Corte Suprema de Justicia en su línea jurisprudencial, como son las sentencias SL 1452, 1688 y 1689 de 2019 y STL 3202 de 2020; que en primera instancia quedó acreditado que los fondos privados demandados no cumplieron con el deber legal, profesional y ético de brindar una información completa, veraz, clara, precisa, técnica, adecuada y oportuna, y se extrae del interrogatorio de parte de la demandante, que los asesores de los diferentes fondos privados nunca le advirtieron de los riesgos de su traslado de régimen, al haberle hablado solo de los beneficios. Retoma de la línea jurisprudencial las reglas donde el deber de asesoría, existente desde la Ley 100 de 1993, según el art. 97 del Decreto 663 de 1993; el consentimiento vertido en formulario no es suficiente para demostrar deber de información profesional; la información que se entregue debe ser clara, cierta, comprensible y oportuna; la inversión de la carga de la prueba; los fondos debieron asesorar desde el principio y que en todos los casos se invierte la carga de la prueba; en estos casos no importa cosa diferente al cumplimiento o no del deber de información, y por eso es que no tiene incidencia si la persona está o no en transición; la reasesoría no convalida el acto; debe ordenarse la devolución de todos los dineros incluyendo los gastos de administración; no opera el fenómeno de la prescripción; el afiliado tiene derecho a reclamar la mejora en el valor de su pensión en cualquier tiempo; en estos asuntos no se aplican normas civiles, solo se aplica el art. 1746 del Código Civil frente a las consecuencias prácticas de la nulidad; no se puede exigir al demandante que demuestre vicios en el consentimiento. Conforme a lo anterior, se puede evidenciar que la parte demandada no cumplió con su deber de información y en este evento se cumplen todos los elementos que toma la Corte Suprema de Justicia.

Solicita se revoque la absolución a Colpensiones del pago de las costas procesales, por ser una de las entidades demandadas dentro del presente proceso, así mismo porque las pretensiones del libelo introductorio fueron concedidas y por ser la condena en costas una de las pretensiones de dicha demanda que fue controvertida por las demandadas al haberse opuesto a la misma, y por ser una consecuencia directa del movimiento del aparato jurisdiccional, conforme se estipula en numeral 1º del art. 365 del Código General del Proceso.

La apoderada de Colpensiones solicita se revoque la sentencia, aduciendo que conforme el material probatorio existente, se puede observar que el formulario de afiliación está firmado por la demandante, sin que se haya desconocido su contenido, de lo cual se deriva una afiliación al RAIS válida sin que se observen vicios en el consentimiento sino que se trató de un acto libre y voluntario, y sin que se hubiera probado un desconocimiento total de las condiciones que acompañarían el ejercicio de aportar al sistema general de seguridad social, como lo quisieron hacer ver a través de la demanda y sin que se pueda afirmar ahora que no era su intención trasladarse al Régimen de Ahorro Individual o que fue sometida a engaño, más aún cuando en el interrogatorio de parte se evidencia que se le brindó información cierta y fiable de las condiciones que otorgan los fondos privados de pensiones; que el incumplimiento de sus expectativas pensionales no es óbice para argumentar un engaño. Aclara que

un acto es ineficaz si se ha omitido un requisito de existencia o de validez en su celebración, lo cual no ocurre en este evento, y para ello se debe verificar que el acto jurídico no haya producido efectos o éstos se deban declarar inválidos, situación que no se presentó en la celebración porque el mismo ha producido efectos; que la celebración de todo contrato conlleva deberes y obligaciones para las partes, y la demandante solo esperaba el cumplimiento de las obligaciones derivadas del fondo y exonerarse del deber mínimo necesario para garantizar el ejercicio contractual celebrado al no utilizar canales de información, no actualizó su información, ni buscó reasesoría sobre su futuro pensional.

En caso de confirmarse la sentencia, solicita se proceda a condenar al fondo privado a hacer la devolución y equivalencia justa de los recursos consignados en la cuenta de ahorro individual del actor, aduciendo, además, la responsabilidad de ajustar los mismos en la medida que Colpensiones lo debe hacer para un eventual reconocimiento y pago de alguna de las contingencias del sistema de seguridad social, esto es, vejez, invalidez o muerte.

Así mismo solicita se confirme la condena impuesta a Protección S.A. de devolver los saldos de la cuenta de ahorro individual de la demandante, el 16% total del descuento en pensión por comisiones de administración, fondo de garantía de pensión mínima y reaseguro, aclarando que cada valor debe estar debidamente indexado.

Que teniendo en cuenta que la decisión judicial de declarar la ineficacia de traslado, crea de manera injustificada y desproporcionada una obligación patrimonial en cabeza de Colpensiones, solicita que el Fondo Privado devuelva los dineros de la demandante conforme a un estudio actuarial o de equivalencia bajo los lineamientos de liquidación aplicado por Colpensiones por medio del cual se determine que se cubre en su integridad la prestación, en los términos del RPM, y donde el cálculo se realice una vez esté en firme y ejecutoriada la sentencia.

PRONUNCIAMIENTO JURÍDICO

El problema jurídico en esta instancia gira en determinar si es procedente la declaratoria de ineficacia, y en caso de ser ello positivo, si hay lugar a ordenar la devolución de los gastos de administración y los seguros previsionales, si es procedente la condena en costas a Colpensiones y si hay lugar al cálculo actuarial, y, en consulta a favor de Colpensiones si dichos conceptos deben devolverse de forma indexada.

Para el caso en concreto no existe discusión y está acreditado que la demandante nació el 24 de noviembre de 1962, (37); así mismo se tiene que estuvo afiliada al ISS desde el 09 de marzo de 1983, a través del empleador Uniformes industrial, (38), y se trasladó al RAIS a la AFP PROTECCION S.A, desde el 22 de enero de 1996, (fls 42).

Descendiendo al caso en particular se tiene que, en el INTERROGATORIO DE PARTE absuelto por la demandante, no se tiene confesión en favor de la AFP con respecto a la ineficacia de la afiliación pretendida, antes bien, de lo narrado por esta se tiene que manifestó que, empezó a trabajar en conavi en el año 1996 como promotora de tarjeta de crédito y que allí ingresaron a trabajar un grupo de 15 personas y con sus diferentes puestos les llevaron un asesor de protección y grupalmente les dijo la asesora que era muy importante estar en el fondo privado porque el ISS se iba a acabar, y que les dijo que debían de llenar el formulario y como lo debían de diligenciar. Que nunca le dijeron que iba a pasar con el tiempo cotizado en el ISS, ni que se iba a abrir una cuenta individual a su nombre, ni le informaron de la pensión anticipada, que la asesoría duro 10 o 15 minutos mientras que llenaba el formulario, y que como no sabía nada procedió a firmar.

Por lo anterior el problema jurídico se resolverá en el siguiente orden:

1. De la ineficacia del traslado

Pues bien, respecto a la ineficacia del traslado se tiene que el derecho a la seguridad social es irrenunciable conforme el artículo 48 y 53 de la CP, por ello cualquier pretensión de cambio en las condiciones de este derecho pensional debe ser tomado de manera autónoma y consiente con una comprensión volitiva tal que no quede duda que la información entregada por la entidad para que, con la libertad e información, la persona pueda decidir si se cambia de régimen o no.

Visto lo anterior, debemos revisar que con base en el art. 13 literal b) de la L 100 de 1993 que habla de la característica de la seguridad social, y señala allí: *“La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1o. del artículo 271 de la presente ley”*, y si nos remitimos al art 271 de la L 100 señala que **no será eficaz el traslado** si se menoscaba la libertad, la dignidad humana, los derechos de los trabajadores que son sujetos de protección, y dice que *“Cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral se hará acreedor, en cada caso y por cada afiliado...”* no solo a la multa sino que dice en forma expresa *“... La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.”*, o sea que se refiere a una ineficacia.

Igualmente, desde el **Decreto 720 de 1994**, por el cual se reglamenta el artículo 105 y parcialmente el artículo 287 de la Ley 100 de 1993, en el capítulo relativo a LA RESPONSABILIDAD DE LAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES Y ORGANIZACIÓN DE LOS PROMOTORES, en sus artículos 10 y 12 respectivamente reza:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PROMOTORES. Cualquier infracción, error u omisión en especial aquellos que **impliquen perjuicio a los intereses de los afiliados**- en que incurran los promotores de las sociedades administradoras del sistema general de pensiones en el desarrollo de su actividad **compromete la responsabilidad de la sociedad administradora ...**”. (Resalto fuera del texto)

“OBLIGACIÓN DE LOS PROMOTORES. Los promotores que empleen las sociedades administradoras del sistema general de pensiones **deberán suministrar suficiente, amplia y oportuna información** a los posibles afiliados al momento de la promoción de la afiliación, durante toda la vinculación con ocasión de las prestaciones a las cuales tenga derecho el afiliado.” (Resalto fuera del texto)

Este deber profesional que existe desde 1994, ese de información que permita al usuario tomar una decisión libremente consentida, es decir, **la carga de la prueba correspondería a la entidad demandada**, y que en estos casos corresponde a que se demuestre: cuál fue la información que se le entregó y en qué vastedad se presentó. Tal conceptualización se encuentra en la sentencia SL 12.136-2014, Rad. 46.292 del 3 de Sept. de 2014, M. P. Dra. ELCY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN, que reza:

“...A juicio de esta Sala no podría argüirse que existe una manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos pensionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple expresión genérica;....”.

Desde ahí ha existido una línea jurisprudencial, entre otras la de radicado 17.595 de 18 de octubre de 2017, en donde se dice, que la información tiene que ver con: 1º. La antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones del disfrute pensional, 2º. El deber de información concreto y comprensible; y 3º. Que sea de manera prudente, y de manera más específica. Igualmente, la sentencia SL 19.447 de 2017 con radicado 47.125, que indicó que aún operaba la ineficacia del traslado si el afiliado no tiene régimen de transición.

En igual sentido continuó esa línea jurisprudencial en el año 2019, como lo es con la SL 1.688, SL 1421 de 2019, SL 4426 de 2019 y recientemente la sentencia SL 2611 de 2020, y de forma más reciente como juez constitucional en las sentencias STL 3716-2020, STL4001-2020 y STL4084-2020, en las cuales se manifestaron que los fondos de pensiones son los obligados a dar una información clara, comprensible y suficiente sobre las consecuencias favorables y desfavorables que su decisión acarrea; y que la carga de la prueba sobre el deber de información corresponde a las AFP, debiendo probar que dicha información fue realizada, con diligencia, cuidado y buena fe, sin que implique en momento alguno que la sola firma o diligenciamiento del formulario pueda entenderse verdadera información.

La anterior argumentación es aplicable al caso concreto, pues PROTECCION S.A no trajo al plenario ninguna prueba eficaz y relativa a la posible actividad de asesoramiento e información adecuada a la demandante, cuando tomó la determinación de trasladarse de régimen en primer momento en el año 1996, sin que existiera confesión de una información suficiente y cierta de las desventajas del RAIS, ni de los factores cambiantes que inciden al cuantificar la mesada pensional como son la rentabilidad, las cotizaciones y la edad probable de ellas y sus posibles beneficiarios al momento de pensionarse; tampoco sobre la deducción de los gastos de administración, ni de seguros previsionales; y no le informaron de modalidad pensional que debía escoger cuando se fueran a pensionar, ni de la pensión anticipada, ni de un capital mínimo que tenía que tener, estando la carga de probar dicha información en cabeza de la accionada., siendo esta la razón por lo que se genera que se haya violentado el **derecho de libertad de selección** del régimen, además de la vulneración del derecho a la dignidad y a la seguridad social de la persona conforme el art 272 de la ley 100 de 1993.

Al respecto la ineficacia, conforme al artículo 271 de la Ley 100 de 1993, IMPLICA que dichos actos son inoponibles, **son imprescriptibles** y no pueden ser convalidados. Por ello no es suficiente que la sociedad PROTECCION S.A. haya aportado los formularios de afiliación, lo que lleva a concluir que al momento de trasladarse de ISS al RAIS en el año 1995, **no le dieron una información completa y suficiente.**

Como consecuencia de anterior, es por lo que se deberá CONFIRMAR la sentencia de primera instancia que declaró la ineficacia del traslado y que CONDENO a la sociedad PROTECCION S.A a trasladar y entregar a Colpensiones la totalidad de los dineros de la cuenta de ahorro individual de la demandante.

2. De las consecuencias de la ineficacia.

2.1. Devolución de los gastos de administración y seguros previsionales indexados.

En lo que respecta a la devolución de las cuotas de administración se CONFIRMARA la sentencia, que ordenó a PROTECCION S.A a trasladar dichas cuotas por el tiempo en que estuvo afiliada la demandante en dicho fondo, teniendo en cuenta que: 1º) En la ineficacia las cosas deben volver al estado en que se encontraban, entendiendo que el aporte pensional debe devolverse completo, sin que pueda admitirse que por haberse generado rendimientos o pagos posteriores a la cotización realizada no se debe tener en cuenta el aporte completo, pues las cosas vuelven al estado en que se encontraban antes de la afiliación fallida y menos habrá de tenerse consideración alguna para la entidad que aprovechándose de la falta de información fue la que indujo a la afiliación inicial o al mencionado traslado al RAIS, 2º) porque debe tenerse en cuenta que dichos porcentajes ingresaron a la AFP accionada durante en el tiempo en que estuvo afiliado la demandante en esta, en tanto que la cuota de administración es manejada directamente por el fondo de pensiones; y 3º) porque la devolución de los gastos de administración es ordenada en la sentencia SL1421 de 2019 y el Fondo de Pensiones debía devolver *“los aportes por pensión, los rendimientos financieros y los gastos de administración al Instituto de Seguros Sociales”*. Así mismo se precisa que dichos gastos de administración deberán devolverse de forma indexada de conformidad con lo establecido en la sentencia SL1689 de 2019, razón por la cual se ADICIONARA la sentencia en este sentido, dado que la misma se revisa también en consulta a favor de Colpensiones.

Y respecto al traslado de los reaseguros o seguros previsionales: hay lugar a su devolución, porque la CSJ SL17595-2017 y CSJSL4989-2018, donde se rememoró la CSJ SL, 8 sep. 2008, rad. 31989 se dijo: *“La administradora tiene el deber de devolver al sistema ..., sumas adicionales de la aseguradora”*, los cuales deben ser devueltos debidamente indexados. Por lo anterior, la sentencia de primera instancia deberá CONFIRMARSE en cuanto ordenó la devolución de dichos rubros, pero deberá ADICIONARSE en el sentido de que los mismos deben ser devueltos de forma indexada.

En lo que tiene que ver con la excepción de **PRESCRIPCIÓN** de las cuotas de administración, la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL-1688 de 2019, ha señalado que la prosperidad de la ineficacia es el resultado del incumplimiento de un elemento estructural del negocio, por lo que, al no haber producido efectos, el solo transcurso del tiempo no tiene la virtualidad de integrar los elementos omitidos, postura que comparte esta Sala por lo que debe decirse que no está llamada a prosperar.

2.2. De la condena en costas a Colpensiones en primera instancia.

Se CONFIRMARÁ la absolución de las costas a Colpensiones de conformidad con lo establecido en el art. 365 del CGP, en vista que Colpensiones no fue la entidad encargada de realizar la debida asesoría, sino que fue la AFP del RAIS, por lo tanto, no hay lugar a condenar a Colpensiones en costas procesales.

2.3. De la realización de estudio o calculo actuarial por parte de Colpensiones.

Ahora, el reproche manifestado en el recurso de apelación interpuesto relacionado con la solicitud de que se faculte a Colpensiones para que realice un cálculo o estudio actuarial para saber que los dineros que van a ser trasladados por Protección S.A si van a ser consonantes con la realidad actual para el momento en que la sentencia quede en firme, considera la sala que dicha petición no tiene vocación de éxito toda vez que la sentencia es clara en el sentido de indicar de forma expresa cuales conceptos se ordena su devolución, y en caso de que dicha entidad, ósea Colpensiones, considere y demuestre que no es lo que se debió trasladar según lo ordenado en la sentencia, podrá iniciar

una acción ejecutiva teniendo como título la sentencia del proceso ordinario para hacer valer tal derecho, pues la declaratoria de la ineficacia no puede quedar condicionada a dicho estudio como lo pretende la parte recurrente.

Sin costas en esta instancia por la forma en que se resuelven los recursos.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: ADICIONAR la sentencia emitida por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, en el entendido de que además de los conceptos de los cuales se ordenó su devolución en primera instancia se **ORDENA** a PROTECCION S.A, para que devuelva a COLPENSIONES, los gastos de administración y los seguros previsionales por el tiempo en que la demandante estuvo afiliada en dicho, pero de forma indexada, según lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia emitida por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, según lo argumentado en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Sin costas en esta instancia por la forma en que se resuelven los recursos.

Las anteriores decisiones se notifican en ESTADOS

Los Magistrados.



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN –
SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N ° 013 del 28 de enero de 2021

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/100>